

# La instalación de un nuevo régimen de empleo en Argentina: de la precarización a la regulación <sup>1</sup>

---

*Héctor Palomino*

## **Introducción**

Las actuales tendencias de crecimiento del empleo registrado y de estancamiento y disminución del empleo no registrado en el sistema de seguridad social, reflejan la instalación y consolidación progresiva de un nuevo régimen de empleo, posterior a la salida de la crisis de 2001 en Argentina. La exploración de esta hipótesis se realiza aquí mediante la combinación de diversos indicadores que otorgan una base empírica a los argumentos teóricos de su fundamentación. En esa exploración se enfoca la dinámica del cambio social e institucional, buscando trascender el marco de “estática comparada” usualmente utilizado en la interpretación de tendencias económicas y sociales a través de indicadores estadísticos. Esperamos que esta contribución aporte a la comprensión del cambio estructural en curso actualmente en Argentina.

En la primera parte se presenta el “hecho” que sirve de punto de partida para la reflexión, construido aquí como la continuidad de las tendencias de empleo registrado y no registrado a partir de un punto de quiebre de la evolución previa, hacia fines de 2004 y principios de 2005. Esto permite diferenciar el período actual, caracterizado por la vigencia de lo que denominamos un nuevo régimen de empleo, que sustituye el régimen anterior de precarización laboral. Posteriormente indagamos algunos de los componentes del nuevo régimen de empleo, a través de una hipótesis de trabajo sobre las “complementariedades institucionales”, derivada del enfoque que prevalece en los estudios contemporá-

---

1 Una versión de este ensayo fue presentado en el 8° Congreso de ASET- Buenos Aires, agosto de 2007.

[hpalomino@trabajo.gov.ar](mailto:hpalomino@trabajo.gov.ar) Relaciones de Trabajo- Facultad de Ciencias Sociales-UBA – Dirección de Estudios de Relaciones de Trabajo- SSPTyEL- MTESS

neos sobre las “variedades” del capitalismo. Entre esos componentes destacamos aquellos sobre los que contamos con información agregada, en especial las negociaciones colectivas y la evolución de los salarios de convenio, que tienen el interés teórico adicional de otorgar un fundamento a la hipótesis sobre la renovación de los marcos prevalecientes de acción colectiva. Esto nos permite extender la exploración hacia los cambios regulatorios, típicamente normativo- jurídicos, y también de comportamiento de los actores sociales, entre los que destacamos especialmente los que surgen de la información agregada y cualitativa sobre los conflictos laborales.

Los enfoques y datos aquí presentados, provienen centralmente de los estudios que realizan los distintos equipos de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales del MTESS, y en especial de la Dirección de Estudios de Relaciones de Trabajo de dicho organismo. Estas reflexiones surgen del intercambio cotidiano en trabajos específicos, reuniones y seminarios con los técnicos y el personal de apoyo de la Subsecretaría, es decir, son el producto de una labor colectiva, más allá que en el curso de la exposición demos cuenta de diversas y valiosas contribuciones individuales.

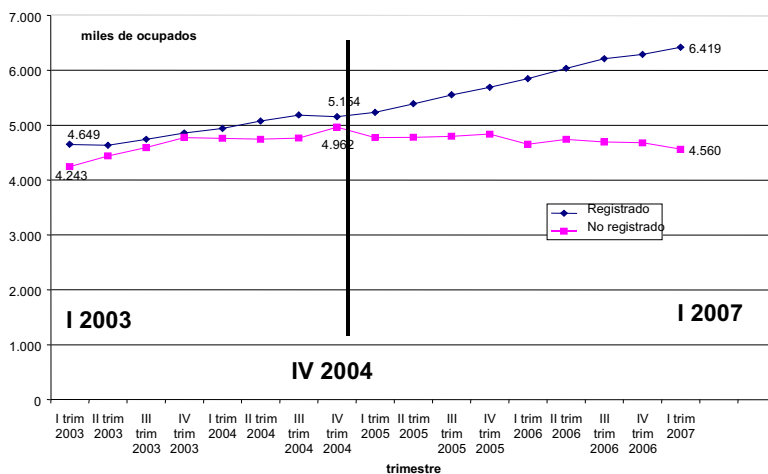
## **1. El quiebre de las tendencias de empleo registrado y no registrado.**

El punto de partida de esta exploración surge de la constatación de un quiebre en las tendencias de empleo registrado y no registrado en la seguridad social, que se presentan en el gráfico 1. Allí se observa que a partir del IV trimestre de 2004, el empleo asalariado registrado sigue una firme tendencia ascendente hasta la actualidad, en tanto que el empleo no registrado se estanca y tiende a disminuir en términos relativos.

El gráfico permite observar que entre el IV trimestre de 2004 y el I trimestre de 2007, los asalariados registrados se incrementaron en 1.265.000 ocupados, mientras que los asalariados no registrados disminuyeron en 402.000 ocupados. Esta evolución implica que de una situación casi idéntica registrada en el IV trimestre de 2004, cuando la brecha entre empleos registrados y no registrados era de menos de 200 mil ocupados, se observa hoy una brecha que se aproxima a los 2 millones de ocupados, en favor del empleo registrado.

¿Cómo interpretar esta evolución? Los factores que inciden en ella son diversos, pero cabe señalar en principio que la misma involucra una reversión acentuada de las tendencias que prevalecieron por lo menos desde mediados de la década anterior, cuando el trabajo no registrado absorbió prácticamente la totalidad del crecimiento del empleo. La “reversión” de esa tendencia es notoria, ya que desde fines de 2004 hasta hoy, prácticamente la totalidad del saldo neto de crecimiento del empleo corresponde al empleo registrado. Más aún, estudios recientes muestran que la incidencia creciente del empleo no registrado ha sido continua

**Gráfico 1**  
**Evolución de los trabajadores registrados y no registrados**  
**2003-2007**



**Fuente:** Elaboración propia en base a la serie elaborada a partir de la Encuesta Permanente de Hogares de INDEC por Diego Schlessler y su equipo de colaboradores de la Dirección General de Estadísticas y Estudios Laborales de la SSPTyEL, para el Boletín de Estadísticas Laborales del MTESS, que puede consultarse en la página Web de ese organismo.

desde hace por lo menos dos décadas, por lo que la evolución reciente constituye un quiebre de una tendencia de más largo plazo:

La hipótesis que aducimos y que buscaremos fundamentar en este estudio, es que la nueva tendencia de crecimiento del empleo registrado se vincula con la instalación de un nuevo régimen de empleo con protección social, diferenciado del previo régimen de precarización laboral instalado a partir del modelo de la convertibilidad. Antes de desarrollar los argumentos sobre este “cambio de régimen”, comentaremos brevemente algunos de los significados del indicador utilizado.

La noción de “trabajo no registrado” surge del concepto estadístico de “asalariados sin jubilación” utilizada por la Encuesta Permanente de Hogares de INDEC<sup>2</sup>. Esta noción alude a los asalariados que no son registrados por sus empleadores en la seguridad social y, en líneas generales, se adapta bastante bien a la idea de “precariedad” en el sentido de la desvinculación del salario con la protección social.

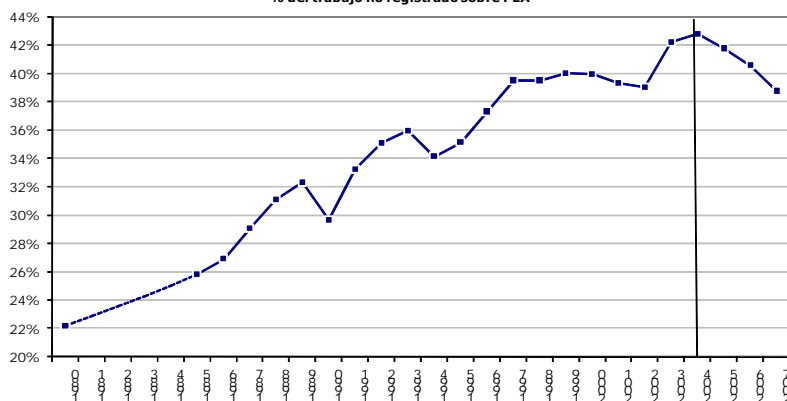
En la interpretación más difundida del indicador, éste es relacionado con la práctica de empleadores que en pos de la disminución de los

<sup>2</sup> Las observaciones que siguen figuran en el estudio de Lépore, Roca, Schlater y Schlessler, 2006.

## Gráfico 2

## Evolución del Trabajo No Registrado 1980-2007

Area Metropolitana de Capital Federal y Gran Buenos Aires (\*)  
 -% del trabajo no registrado sobre PEA-



Fuente: Schlessner, D. (2008): “La evolución del trabajo no registrado en el debate actual”. Trabajo, Ocupación y Empleo N° 7. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Buenos Aires. En prensa.

(\*) La evolución 1980-2007 corresponde al Área Metropolitana de GBA, que es la única que cuenta con información completa sobre todo el período. La serie fue construida descontando a los perceptores de subsidios por desempleo a través de diversos programas que exigen contraprestación laboral como condición de acceso a los mismos (éstos últimos se generalizaron a partir de 2002).

costos laborales, o bien no declaran a sus trabajadores con el fin de evitar el pago de las respectivas cargas previsionales, o bien obligan a sus empleados a suscribir un contrato de prestación de servicios, de índole comercial o civil, no laboral, incurriendo en lo que se denomina “fraude laboral”<sup>3</sup>.

En estas interpretaciones resulta necesario deslindar el carácter de los empleadores, que pueden corresponder a los hogares, el Estado y las empresas privadas. En el caso de los hogares, la figura típica asociada es la de las trabajadoras del servicio doméstico, que constituye una proporción significativa, superior al 20%, del trabajo no registrado. La condición de la mayoría de estas trabajadoras es la de “no registradas”<sup>4</sup>.

3 En este último caso los “falsos” empleados se ven obligados a asumir por si mismos el costo de incorporación a la seguridad social, inscribiéndose como “autónomos” o “monotributistas”.

4 La reforma reciente de 2006 introducida para estimular su inscripción en la seguridad social puede haber modificado parcialmente esa condición. El impacto de esa reforma es importante, ya que posibilitó la inscripción en la seguridad social de 260.000 trabajadoras domésticas, aproximadamente la cuarta parte del total. Como la reforma estableció una serie de mecanismos de inscripción “voluntaria” en la seguridad social tanto de parte de las trabajadoras del servicio doméstico como de los hogares empleadores, es posible teóricamente delinear diversos tipos de trayectorias laborales, aunque se carece de información para determinar empíricamente esas configuraciones.

En relación con el Estado, la figura típica asociada es la del personal contratado en términos de prestadores de servicios (en contratos de “locación de obra” o de “locación de servicios”), que deben inscribirse en la seguridad social como “autónomos” o “monotributistas”. La información de la encuesta no permite deslindar empíricamente en estas situaciones la condición voluntaria o involuntaria por parte de los trabajadores. La incidencia de esta categoría (correspondiente a los casos en que el empleador es el Estado), es inferior al 5% del total de trabajo no registrado.

En relación con las empresas privadas, la versión actual de la encuesta permite identificar la mayoría de las situaciones de no registro y algunas de las características del empleador respectivo, en particular el sector de actividad y sus dimensiones en términos de la cantidad de empleados, pero no otras características del empleador como el grado de formalización, tipo de mercado en los que opera, etc. Una encuesta reciente (III Trimestre de 2005) del MTESS realizada en colaboración con el INDEC y el Banco Mundial, permitió detectar situaciones diferentes de no registro de los trabajadores según el carácter de los empleadores y su grado de formalización. De esta manera pudo determinarse la incidencia del trabajo no registrado según diferentes tipos de empresas: aquellas que no registran sólo una parte de sus trabajadores pero registran otra parte -empresas “formales”- de aquellas empresas que no registran a ninguno de sus trabajadores y operan comúnmente en el sector informal -empresas “informales”-.

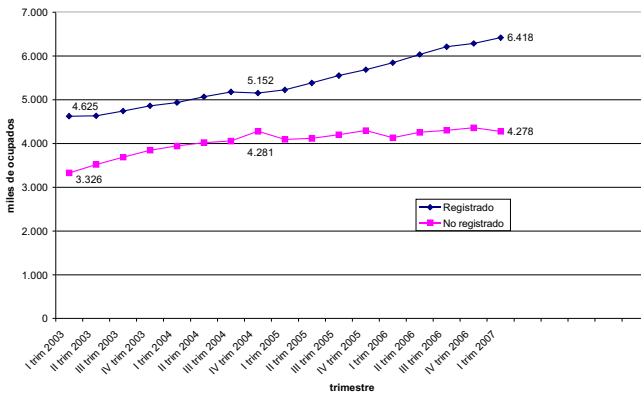
Finalmente, la categoría de trabajadores no registrados del Gráfico 1 incluye también a los perceptores de subsidios por desempleo incorporados por el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados aplicado a partir de 2002, que son clasificados como “asalariados” cuando realizan una contraprestación laboral en el marco de ese programa. Sobre la caracterización de estos “asalariados” no existe un consenso, pero la encuesta de hogares permite distinguirlos estadísticamente y provee información al respecto a través de la publicación sistemática de dos tipos de tasas: las “oficiales” que los consideran “dentro” del mercado de trabajo, y las “complementarias” que los deja “fuera” del mismo. La incidencia de esta categoría dentro del trabajo no registrado fue significativa en la época de instalación del PJJHD, especialmente durante 2002 y 2003 cuando llegó a incorporar a 2 millones de personas. Esa incidencia fue disminuyendo progresivamente hasta la actualidad: en mayo de 2007 permanecían en el programa aproximadamente 950.000 personas (Plan Integral para la Promoción del Empleo, 2007). La encuesta de hogares recoge información parcial de estos perceptores de subsidios, ya que sólo contabiliza aquellos que declaran percibirlo y realizar alguna contraprestación laboral efectiva sólo en las áreas relevadas por la encuesta.

La descripción de las diversas figuras laborales cubiertas por la noción de trabajo no registrado revela una gran heterogeneidad, lo que constituye un llamado de atención para las interpretaciones simplistas que tienden a concebirla como una totalidad a partir de sólo una de esas figuras. La simplificación prevalece en particular entre los analistas que tienden a asimilar el no registro a la “informalidad” laboral, y atribuirlo íntegramente a las necesidades de empresas privadas que recurren a ese mecanismo para disminuir sus costos laborales<sup>5</sup>.

El Gráfico 1 indica que la incidencia del trabajo no registrado desciende desde el último trimestre de 2004 con un ritmo superior a dos puntos porcentuales por año. La rapidez de esta disminución se relaciona sobre todo con uno de los componentes del trabajo no registrado, el que corresponde a los perceptores de subsidios del PJJHD. La disminución de la cantidad de estos perceptores se relaciona con factores diversos, de los cuales el más importante es su incorporación al empleo, por lo que pesa aquí el mismo factor determinante del descenso de la tasa de desocupación abierta durante el mismo período. Pero también pesan en esta tendencia algunos factores institucionales, como el traspaso a otros programas sociales que no exigen contraprestación laboral, y demográficos, ya que la condición de acceso al subsidio se limita a quienes tienen hijos menores de 18 años.

### Gráfico 3

Evolución de los trabajadores registrados y no registrados 2003-2007  
(sin planes de empleo) Fuente: SSPTyEL-MTESS en base a EPH

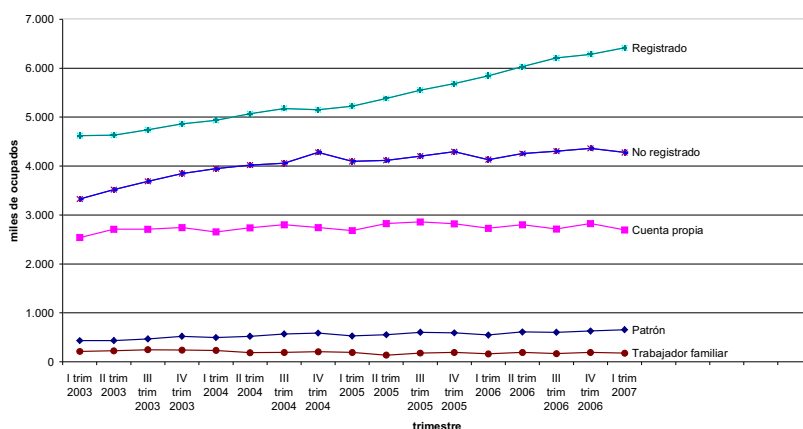


5 Este argumento sirve comúnmente al fin de demandar rebajas de las “cargas sociales” de los empleadores, destinadas a favorecer a las empresas privadas, bajo el supuesto que de esa manera disminuirá el “trabajo en negro” y/o la “informalidad”. Esta argumentación es discutible, aunque sólo se aplicaría, como hemos visto, a una porción -importante pero limitada- del trabajo no registrado, la correspondiente a las empresas privadas. No se aplicaría ni al trabajo doméstico, ya que en este caso los empleadores son hogares y no empresas, ni a los perceptores de subsidios por desempleo, ni a los contratados por el Estado. Pero incluso en el caso de las empresas privadas, cabe diferenciar diferentes tipos de situaciones.

Si no se considera a los perceptores de subsidios del PJJHD, se observa -en el gráfico 3- que la cantidad de trabajadores no registrados se estanca a partir del último trimestre de 2004, por lo que disminuye su incidencia relativa pero su número absoluto registra una escasa variación. Un aspecto de interés en esta evolución es la del trabajo doméstico que crece a lo largo del período, mientras que las otras categorías, las que corresponden al Estado y a las empresas privadas, tienden a estancarse apreciablemente.

### Gráfico 4

Evolución de las categorías ocupacionales 2003-2007  
(ocupados sin planes) Fuente: SSPTyEL- MTESS en base a EPH



En el gráfico 4 se observa que también se estancan, a partir del último trimestre de 2004, las categorías no asalariadas, por lo que la evolución creciente del empleo es explicada centralmente por la dinámica ascendente de los asalariados registrados en la seguridad social. En verdad cualquiera de los gráficos muestra claramente que el crecimiento reciente del empleo responde al del empleo registrado, que absorbe casi íntegramente el saldo neto de crecimiento ocupacional.

## 2. Sobre la noción de precarización

La noción de precarización laboral utilizada aquí alude a la desvinculación del salario de las protecciones y garantías asociadas con ese tipo de remuneración. Este es el sentido definido por los estudios incluidos en una temprana recopilación sobre el tema realizada en Argentina a fines de los '80 (Galín y Novick, 1989). Esta definición permite vincularla con la más restringida de "asalariados no registrados en el sistema de seguridad social por sus empleadores" que corresponde a la sintetizada en el término de trabajadores "no registrados". Si bien este sentido de la "precarización" es restringido, está asociado con diversas carencias padecidas por los asalariados clasificados en esta categoría, algunas de

las cuales son relevadas por la encuesta, tales como la de no cobrar aguinaldo, no contar con vacaciones pagas, no disponer de una obra social y otras. Además, la no inscripción en la seguridad social es una característica compartida por algunas figuras contractuales no específicamente laborales, como los contratos de “pasantía” y los de “prestación de servicios”.

La noción de precariedad vinculada con la inserción laboral fue desarrollada en Francia para aludir a la sustitución paulatina de las situaciones “normales” de empleo, definidas por contratos de duración indeterminada, a tiempo pleno y con unicidad del empleador, por situaciones “particulares” de empleo (Desvé, Lorençon, 2002). A partir de los años '70, cuando el crecimiento económico se torna más lento y se registra un incremento del desempleo, se asiste a la difusión de formas particulares de empleo (“atípicas” en relación con la “norma” mencionada) antes limitadas a la pequeña producción mercantil y las actividades agrícolas, que se reflejan en contratos de duración determinada, contratos a tiempo parcial, contratos “asistidos” -subsidiados por programas estatales de diferente tipo-, actividades de tiempo reducido. Lo que vincula estas formas particulares de empleo con la precariedad, es que en ellas prevalecen la inestabilidad o discontinuidad de las trayectorias laborales o profesionales, ingresos insuficientes y no está asegurada la protección social (Fourcade, 1992).

En Argentina es conocido que algunas actividades funcionan en base a contratos caracterizados por la inestabilidad, como la construcción y las actividades agropecuarias estacionales, así como algunas actividades de la administración pública, desde mucho tiempo antes que comenzara a hablarse de precariedad. Por otro lado, la insuficiencia de ingresos puede afectar a vastos sectores de asalariados, aunque no en todos esos casos puede hablarse estrictamente de precariedad, por más que ésta se asocie frecuentemente con bajos ingresos. Finalmente, la desvinculación del contrato con la seguridad social afecta desde los '90 a una proporción creciente de los asalariados, y sólo en años recientes se observa una reversión de esa tendencia.

Los términos de “precarización” y “precariedad” se fueron popularizando en la última década no sólo por la erosión de las garantías y protección de una parte importante de los asalariados, sino también a instancias de los movimientos sociales contestatarios de la denominada globalización neoliberal, que fueron incorporando sentidos más amplios y en algunos casos diferentes que los enumerados, en particular el de la inestabilidad en el empleo. El término se fue extendiendo a diferentes modalidades de inserción ocupacional en diversos países, aunque no en todos se lo utiliza con los mismos sentidos. Sólo en años recientes puede constatarse la búsqueda de sentidos compartidos para esta noción en diferentes países, por lo que puede esperarse de estos relevamientos, aún incipientes, la detección de los sentidos comunes integrados en tér-



minos diferentes, así como los sentidos diferentes incorporados en conceptos nominalmente idénticos. Sin embargo, más allá de estas diferencias, en líneas generales la noción es utilizada con una orientación precisa: la de indicar una serie de fenómenos de desestructuración de los mercados de trabajo que afectan la condición de los asalariados.

Algunos especialistas como Serge Paugam (2007) van más allá del análisis de la precariedad laboral en términos de la configuración del trabajo en las organizaciones, enfocando su impacto en la identidad y subjetividad de los trabajadores revelado a través de las encuestas destinadas a evaluar la satisfacción/insatisfacción con el trabajo. Este enfoque permite articular la noción de precariedad laboral con una serie de fenómenos que han sido conceptualizados de manera muy diversa, como “desafiliación” (Castel, Robert, 1995), “corrosión del carácter” (Sennet, 1999), “fragmentación” (Offe, 1994), “individualización” (Castells, Manuel, 1994), y otros (Beck, 2000; Giddens, 1998).

Estas conceptualizaciones tienen el interés de vincular los cambios en los mercados de trabajo con sus impactos sociales y en la subjetividad de los trabajadores. Es posible que la noción de “individualización del trabajo” -que Manuel Castells toma sobre todo de los análisis de Benjamín Coriat-, y su vinculación con las tesis sobre la emergencia de la “sociedad de la información” (ver Cap. 4 de Castells, 1994), constituya la clave de interpretación más difundida ya que enfoca dos procesos simultáneos y diferentes que son englobados bajo el mismo término. Por un lado, la individualización alude al “empresarialismo” que prevalece en algunas modalidades de inserción laboral de las nuevas actividades vinculadas con la expansión de las “tics”, particularmente notorias en los servicios financieros que incorporan muchos trabajadores como “socios” de actividades en expansión. En estas actividades el salario de algunas categorías de trabajadores deja de estar vinculado con las negociaciones colectivas capital/trabajo, y se articula con mecanismos (como los “bonos”) vinculados con el giro de negocios de la actividad respectiva, por lo que resulta difícil deslindar aquí las expectativas salariales de las de “ganancia” o beneficio económico. Pero en el otro extremo de la configuración de los mercados de trabajo contemporáneos sujetos a una fuerte polarización social, se observa la cada vez mayor incorporación de trabajadores con una inserción inestable o a tiempo parcial con bajos salarios, por lo general débilmente integrados en sindicatos o no protegidos por regulaciones colectivas. La noción de individualización recubre ambas formas de inserción laboral, situados en polos extremos y opuestos del mercado de trabajo, aunque por lo general la precariedad laboral se asocia sobre todo con el segundo de los sentidos descriptos. Es esto posiblemente lo que ha favorecido su difusión en los estudios sociológicos en Argentina desde la segunda mitad de los noventa.

La emergencia de un nuevo régimen de empleo en Argentina a partir de 2005, difícilmente pueda ser comprendido con las categorías descriptas, ya que en su mayoría éstas se revelan fructíferas para el estudio de la descomposición o el declive de los asalariados, afectados por el incremento del desempleo y la precariedad laboral. De allí que, en principio, sea necesario construir nuevas conceptualizaciones destinadas a comprender la recomposición evidente del mercado de trabajo en Argentina. Un estudio reciente realizado en el curso de una tesis de doctorado (Gabriela Wyczykier, 2007), sugiere una línea fructífera de indagación sobre el tema, que es afín con el enfoque aquí adoptado. Esta reflexión, surgida del campo de estudios sobre movimientos sociales, tiene la ventaja no sólo de vincular conceptualmente autores y problemas de origen y localización diversos, sino también la de abrir la indagación sobre la evolución reciente de diversas experiencias en Argentina. De acuerdo con esta línea de interpretación, aquellos conceptos teóricamente diversos comparten el rasgo común de aludir a una ruptura de los marcos previos de acción colectiva. En este sentido, la precarización laboral puede ser concebida como un efecto de la ruptura o descomposición del marco previo de acción colectiva.

Este mismo enfoque puede adoptarse para comprender el movimiento contrario al de la precarización. Precisamente, el estudio citado recurre a la noción de “recolectivización” para aludir al proceso de recomposición, reconstrucción o construcción de un nuevo marco de acción colectiva en las experiencias que, como las de las empresas recuperadas por los trabajadores, recurren a la autogestión para poner en funcionamiento los establecimientos que fueron abandonados por sus propietarios o directivos en el seno de la crisis económica y de empleo reciente. Es que, efectivamente, los trabajadores deben gestionar por sí mismos el proceso productivo, al mismo tiempo que deben solucionar diversas carencias más allá de éste, lo cual implica no sólo obtener ingresos suficientes para la supervivencia sino también restituir protecciones y garantías (como por ejemplo las vinculadas con la salud y la jubilación) antes integrados a su salario como trabajadores dependientes.

Esta noción de “recolectivización”, colocada en un plano más general, permite indagar un conjunto de procesos recientes en el campo de las relaciones laborales que apuntan a la recomposición del marco de la acción colectiva en Argentina. Es a estos procesos a los que aludimos en términos de la configuración de un nuevo régimen de empleo.

### **3. La emergencia de un nuevo régimen de empleo.**

La hipótesis de base para explicar la dinámica de crecimiento de los asalariados registrados en la seguridad social, es la emergencia de un nuevo régimen de empleo que desplaza el régimen de precarización laboral previo. Como sobre este último y su entronización en la pasada dé-

cada existe una abundante bibliografía y extensos análisis sobre sus determinantes, hemos optado aquí por obviar su tratamiento extenso y enfocarnos directamente sobre las características del nuevo régimen de empleo e indicar qué aspectos del anterior régimen viene a modificar y/o sustituir.

La noción de “régimen” alude a la identificación de una serie de “complementariedades institucionales” entre distintos componentes de las relaciones laborales. El supuesto de base en este enfoque es la presunción de coherencia entre diversas instituciones en un contexto socioeconómico dado, precisamente porque ambos (instituciones y contexto) reflejan determinados compromisos políticos entre grupos sociales (Amable, 2006). Este enfoque tiene la ventaja de definir las instituciones en términos del tipo de compromiso político -seguramente coyuntural e inestable- que las sustenta, favoreciendo su análisis en términos de economía política más que normativos o jurídicos. Asimismo, la ventaja de identificar las complementariedades es la de evitar las interpretaciones monocausales, orientando la indagación sobre diversos cambios institucionales y estrategias de actores sociales, que pueden hallarse en correspondencia o contradicción con otras instituciones y estrategias.

La búsqueda de los determinantes del crecimiento del empleo registrado desde fines de 2004 hasta la actualidad en un contexto de crecimiento tiende a ser explicado por un enfoque económico “keynesiano”. Esta hipótesis “económica” es concebida por lo general como “suficiente” para encarar la explicación del crecimiento del empleo en general y del empleo registrado en particular: serían las “expectativas” empresarias de continuidad del crecimiento económico (y por lo tanto de expansión de sus ventas en el mercado) las que inducirían a retener el personal e incorporar nuevo personal bajo las regulaciones laborales vigentes (registrados en la seguridad social), dejando de lado los ajustes de los planteles de personal a través de la rotación (de los trabajadores no registrados).

Aunque esta explicación es sin duda importante, ya que constituye un marco necesario para el crecimiento del empleo en general, no parece suficiente para explicar por qué el crecimiento del empleo registrado contrasta con el decrecimiento o estancamiento del empleo no registrado desde 2004. Por eso nuestro objetivo específico aquí es analizar aquellos componentes políticos y económicos que permiten comprender y enmarcar el surgimiento del nuevo régimen de empleo, así como señalar la importancia de la acción estatal para el mismo. Esos otros factores que se describirán a continuación, pueden ser enmarcados en:

- i) el nuevo rol del Estado, en virtud de la recuperación de su capacidad de arbitraje, que incide también en la redefinición normativa en diversas áreas, principalmente las vinculadas con la esfera de actuación del Poder Judicial;

- ii) un conjunto de políticas públicas, tales como la revitalización del salario mínimo y la negociación colectiva;
- iii) la redefinición de las estrategias de los actores sociales, principalmente los sindicatos, y también de los empresarios, aunque en este último caso más que de estrategias podría hablarse de comportamientos adaptativos.

### 3.1. El nuevo rol del Estado

La salida de la crisis de 2001 fue encarada a través del fortalecimiento de la capacidad de intervención estatal sobre la economía y, fundamentalmente, de la recuperación de su capacidad de arbitraje frente a los actores internos, condición para afrontar la presión y demandas de los actores externos. El indicador central de esta recuperación fue la obtención de un nuevo equilibrio macroeconómico a través de la devaluación del tipo de cambio, el impulso al crecimiento económico y el empleo, el equilibrio presupuestario logrado a través del incremento de los recursos fiscales y la renegociación de la deuda externa. En cada uno de esos planos la aplicación de la política estatal debió enfrentar resistencias de los actores afectados negativamente, al tiempo que recibía apoyo y legitimación por parte de los beneficiarios de dichas políticas. La referencia a la recuperación de la capacidad de arbitraje del Estado indica precisamente este rol mediador entre intereses contrapuestos, más allá de la debilidad del Estado en términos de “aparato”.

La potencialidad del esquema descrito para impulsar el crecimiento económico es notable y ha suscitado una renovación del debate sobre el desarrollo económico en Argentina, incluida la reevaluación del modelo sustitutivo de importaciones que prevaleciera hasta mediados de la década de 1970', habida cuenta de su “aire de familia” con el modelo económico actual (Gerchunoff, 2006). En este sentido, se señalan dos momentos diferentes del anterior modelo sustitutivo de importaciones: i) el prevaleciente hasta principios de los '60 del siglo pasado, en que ese modelo aparecía limitado por el sector externo de la economía, debido a la insuficiencia de las exportaciones para garantizar un crecimiento sostenido, dando lugar al esquema “*stop and go*” lo que se reflejaba en ajustes periódicos de la actividad económica; ii) el prevaleciente durante la mayor parte de los '60 hasta mediados de los '70, en que la restricción externa fue atenuada lo cual permitió superar la recurrencia de los ciclos de “*stop and go*”. En esencia, este argumento indica que lo que se denominó “agotamiento” del modelo sustitutivo de importaciones se refería al momento i), mientras que durante los '60 ese modelo manifestó su capacidad de resolver la restricción externa que imponía ajustes cíclicos. En relación con la situación contemporánea, el nuevo modelo guarda afinidad con ese segundo momento de la sustitución de importaciones, en el sentido

que no se observan hoy restricciones externas debido a la expansión de la cantidad y valor de las exportaciones debido a la particular coyuntura de los mercados internacionales en los que opera Argentina.

Más allá de las tendencias positivas del nuevo “modelo” económico, éstas permiten explicar sobre todo el crecimiento del empleo en los últimos cuatro años. Sin embargo, cabe diferenciar dos etapas diferentes en ese crecimiento: la primera, vigente durante 2003 y 2004, cuando crecían conjuntamente el empleo no registrado y el empleo registrado; y la segunda etapa que se prolonga en el curso de los últimos tres años, 2005-2007, en que el grueso del empleo creado corresponde a los asalariados registrados en la seguridad social. Es en relación con esta última tendencia que cabe reflexionar sobre el cambio del régimen de empleo, y sobre las políticas estatales orientadas a favorecer el crecimiento del empleo registrado. Entre esas políticas destacamos dos: una encarada por el MTESS, y otra relacionada con cambios jurídicos y normativos provenientes del Poder Judicial.

i) A partir de 2004 el MTESS encaró el fortalecimiento de la inspección del trabajo, a través de un Programa *ad-hoc*, el Programa Nacional de Regularización del Registro Laboral orientado al control del trabajo no registrado en las empresas de manera planificada. El marco para el diseño de ese programa fue la Ley 25.877 de Ordenamiento Laboral sancionada en marzo de 2004. La incorporación de 400 inspectores y la inversión de recursos para su capacitación y profesionalización, revitalizó una institución que había sido prácticamente anulada durante los '90. Posiblemente éste sea uno de los instrumentos de política aplicada más relevante no sólo en términos de eficacia práctica sino sobre todo simbólica, ya que indica claramente la orientación estatal favorable al control del registro laboral y la penalización. En el marco de ese programa, entre septiembre de 2003 y marzo de 2007 se extendió la inspección a 389.000 empresas con una cobertura de 1.126.000 trabajadores (PNRT, 2007).

En relación con la argumentación desarrollada aquí, el contraste de este fortalecimiento de la inspección laboral con el desmantelamiento de ese instituto durante los '90 es notable. En la década pasada, prevalecía una concepción orientada a desplazar el control estatal hacia controles de “mercado”, a través de los instrumentos previstos en la legislación sobre riesgos del trabajo. El supuesto de esa concepción era que a través de las aseguradoras de riesgos del trabajo las empresas se verían obligadas a registrar a los trabajadores. Por otro lado, la disminución de los costos del registro laboral, principalmente la eliminación o disminución transitoria de las contribuciones patronales a la seguridad social, debía constituir un estímulo para el registro laboral. En vista del incremento del trabajo no registrado a niveles inéditos, particularmente desde mediados de los '90 en adelante, estos mecanismos se revelaron ineficaces (Beccaria y Galín, 2001; Senén González y Palomino, 2006).

ii) En febrero de 2006 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo produjo una acordada destinada a unificar los criterios aplicados por los jueces del fuero en relación con los casos de subcontratación<sup>6</sup>. La ocasión de esta novedad introducida en la jurisprudencia fue un caso en que una trabajadora de una empresa subcontratada demandó a la empresa principal para la que prestaba servicios. El argumento de la Cámara se basó en una norma vigente en el derecho civil que faculta al acreedor a seleccionar al deudor sobre el cual ejercer su demanda. Este criterio se halla en correspondencia con el principio de “solidaridad” entre empleadores -la obligación de la empresa principal de responder por los trabajadores contratados por las empresas proveedoras o clientes de aquella- frente a los trabajadores subcontratados, sancionado por los artículos 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo que regula los derechos individuales de los trabajadores. Este cambio normativo se orienta a limitar la subcontratación “precarizante”, en el sentido de obligar a las empresas a controlar las condiciones de trabajo y empleo de sus subcontratadas. Aunque resulta difícil evaluar el impacto efectivo de la norma, ésta incidió en la filosofía de los consultores de empresa que frecuentan el espacio público con artículos de opinión, que a partir de la jurisprudencia citada comenzaron a advertir a sus clientes sobre los riesgos que asumen en caso de no ejercer controles sobre las condiciones de trabajo de las empresas subcontratadas, y recomendando la subcontratación sólo con los fines originales de ésta, basadas en los beneficios potenciales de la especialización.

En términos prácticos, esta acordada de la Cámara de Apelaciones vino a restituir la vigencia plena del principio de solidaridad de los empleadores en la subcontratación, que había sido afectada a través de normas derivadas también de la jurisprudencia en la década pasada. En 1993 la Corte Suprema había dispuesto -a través de un “*leading case*”<sup>7</sup>- limitar la vigencia del principio de solidaridad entre empleadores frente a trabajadores subcontratados, eliminando la responsabilidad de la empresa principal y abriendo así la posibilidad de difundir la subcontratación “precarizante”. Este es un ejemplo típico que puede aducirse en relación con la hipótesis de complementariedad institucional, en el sentido que la disposición de la Corte Suprema de los '90 era consistente con el régimen de precarización laboral, mientras que la acordada reciente de la Cámara de Apelaciones es consistente con el nuevo régimen de empleo. Lo significativo en este caso, es que tanto la precarización en la década pasada

6 Se refiere al fallo del 3 de febrero de 2006, relacionado con el expediente N° 21.551/2001 - Sala VI, caratulado “Ramírez, María Isidora c/ Russo Comunicaciones e Insumos S.A. y otro S/ Despido”, convocado a acuerdo plenario en virtud de lo dispuesto por el art. 288 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para unificar jurisprudencia sobre la siguiente cuestión: “¿Es aplicable el artículo 705 del Código Civil a la responsabilidad del artículo 30 L.C.T.?”.

7 Se refiere al caso tratado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del fallo dictado en autos: “Rodríguez c/ Cía. Embotelladora Argentina” del 15 de abril de 1993.

como el rechazo de la precarización en el nuevo régimen de empleo, no involucran cambios del cuerpo legal sino de su interpretación a través de la jurisprudencia respectiva, es decir, son cambios de tipo adaptativo en relación con un cuerpo legal relativamente antiguo, la Ley que regula el derecho individual de trabajo.

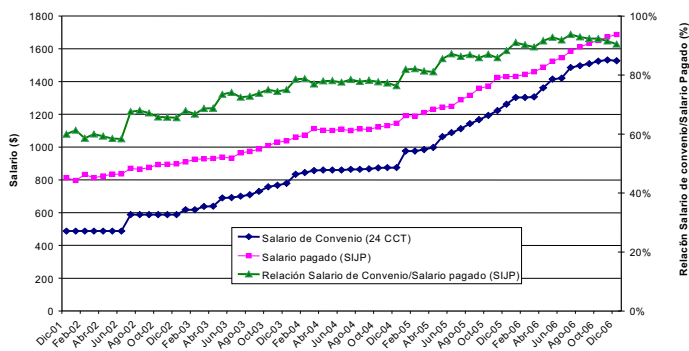
También pueden mencionarse otros ejemplos de la reorientación del Poder Judicial en el sentido de la producción de normas tendientes a consolidar un nuevo régimen de empleo, que van desde la revisión de la Ley de Accidentes de Trabajo y de la norma sobre indemnización por despidos por parte de la Corte Suprema, o la instalación de una nueva normativa que incorpora figuras penales (no excarcelables) en los casos de fraudes tributarios. Esta reorientación jurídica, que no será analizada aquí por razones de espacio, también puede ser interpretada en términos de las complementariedades institucionales dentro del nuevo régimen de empleo.

### 3.2. La determinación de los salarios y la negociación colectiva.

La evolución reciente de los salarios de convenio en Argentina, muestra su convergencia con los salarios efectivamente pagados, la reducción progresiva de la brecha entre ambos (Gráfico 5). Esta convergencia actual contrasta apreciablemente con la situación previa, ya que hacia 2001 la brecha entre salarios de convenio y salarios pagados alcanzaba prácticamente al 50%. Dicho de otra manera: hasta 2001 los salarios pagados duplicaban prácticamente los salarios de convenio mien-

Gráfico 5

#### Convergencia salario de convenio y salario pagado. (2001-2006)



Fuentes: Salario de Convenio: Dirección de Estudios de Relaciones de Trabajo-SSPTyEL- MTESS, sobre la Base de Negociación Colectiva (elaboración: D. Trajtenberg y M. Zanabria).



tras que hacia fines de 2006, el promedio de los salarios de convenio constituían más del 80% de las remuneraciones efectivamente pagadas

Salario Real: Remuneraciones brutas de los asalariados registrados del sector privado. Dirección de Estadísticas y Estudios Laborales-SSPTyEL en base al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. (elaboración S. Rojo y V. Castillo). El gráfico muestra la relación entre el promedio de los salarios conformados de convenio y las remuneraciones efectivas de los asalariados privados, en términos de la evolución mensual entre 2001 y 2006 del % que representa el salario de convenio sobre las remuneraciones.

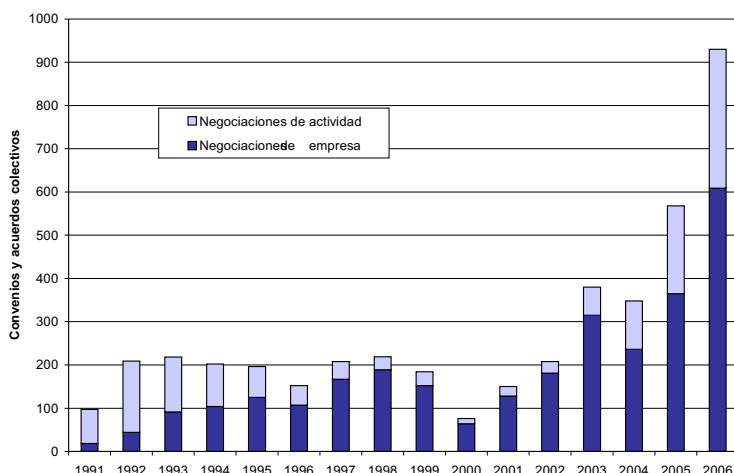
La brecha entre salarios de convenio y salarios pagados, puede ser interpretada como el margen a disposición de las empresas para “individualizar” la relación salarial: dado que el salario de convenio es pactado colectivamente, la brecha refleja la capacidad empresaria para particularizar el vínculo salarial con sus empleados. En términos de la diferencia entre ambos períodos, el actual y el que culminara con la crisis de 2001, puede ser interpretada como un cambio de tendencia en el que se pasa de un período de “individualización” de la relación salarial, a la determinación “colectiva” de los salarios a través de la mediación sindical.

Un factor clave de esta nueva tendencia es el incremento sistemático de la negociación colectiva, y en especial de la negociación por rama de actividad (Gráfico 6). En 2006 se registraron 930 negociaciones homologadas por el MTESS, valor que supera más de 4 veces el promedio de negociaciones registrado durante la década del '90. La cifra de 2006 no constituye un registro excepcional, es más bien una “norma”, confirmada por información más reciente sobre la cantidad de negociaciones homologadas en el primer trimestre de 2007 (que superaron a las registradas en el mismo trimestre del año anterior). La alineación de esta tendencia con el nuevo régimen de empleo parece evidente: comparando la evolución que muestran los gráficos 1 y 5, el incremento de la cantidad de negociaciones colectivas coincide en el tiempo con el crecimiento del empleo registrado. En este sentido la evolución del empleo registrado supone un nuevo marco para la determinación salarial a través de mecanismos colectivos, del mismo modo que, en sentido contrario, la individualización de la relación salarial prevaleciente en los '90 operaba en un marco de baja frecuencia de la negociación colectiva (Palomino, Trajtenberg, 2007).

La reducción de la brecha entre salarios de convenio y salarios pagados indica la reducción del margen de discrecionalidad empresaria para fijar unilateralmente los salarios de sus trabajadores sin la mediación del sindicato. Es necesario sin embargo matizar esta observación, en el sentido que el movimiento reflejado por el gráfico es una tendencia “agregada” y que existen importante diferencias entre sindicatos, vinculadas con relaciones de poder y control. En efecto, pueden existir acuer-



**Gráfico 6**  
**Dinámica de la Negociación Colectiva 1991-2006**



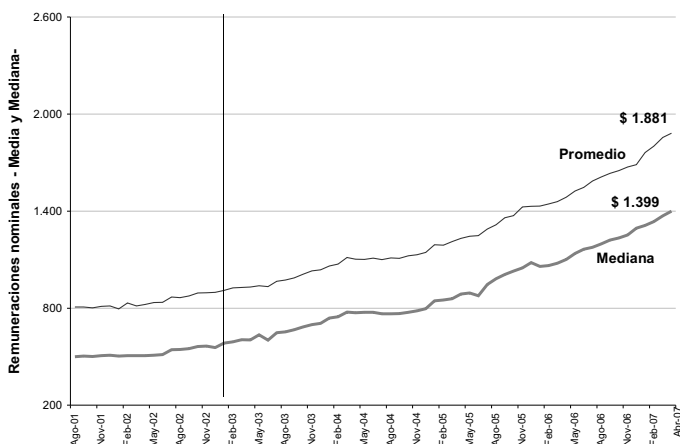
Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones de Trabajo- SSPTyEL. Elaboración de David Trajtenberg, en base a la información sobre convenios y acuerdos colectivos homologados, provistos por la Secretaría de Trabajo - MTESS.

dos colectivos en establecimientos que superan los salarios de convenio del sector respectivo, hecho frecuente en los sectores oligopolizados. Este hecho, bien conocido en Argentina y también frecuente en otros países, tiende a incrementar los diferenciales salariales. La información disponible sobre algunos sectores (ver el caso de la industria de la alimentación y el contraste entre panaderos y aceiteros en Senén González y otros, 2006), muestra que pueden distinguirse actividades en las que los salarios tienden a evolucionar muy por encima del promedio salarial de toda la economía, mientras que en otros el salario promedio se establece muy próximo al salario mínimo.

El nivel de salarios responde en principio a la capacidad y fuerza relativa de las fuerzas sociales, sindicatos y empleadores, de cada sector y, teóricamente, en la medida que no intervengan mecanismos regulatorios, las negociaciones tenderán a reflejar esas relaciones de fuerza con el consiguiente incremento de los diferenciales salariales entre sectores y dentro de cada sector. Sin embargo éste no parece ser el caso actual, ya que los datos agregados, en especial una tasa de crecimiento de la mediana de los salarios (que indica el valor por debajo del cual se ubica el 50% de los trabajadores) mayor que la del salario promedio, indican que los diferenciales salariales tienden a reducirse (Gráfico 7, referido a asalariados registrados privados)<sup>8</sup>: mientras que el promedio salarial creció 20% entre agosto de 2001 y abril de 2007, la mediana creció 44% en el mismo período. Por lo tanto, un contexto de incremento del salario pro-

<sup>8</sup> Ver Boletín de Remuneraciones de SSPTyEL, 2007.

**Gráfico 7**  
**Evolución de las remuneraciones brutas nominales de los asalariados registrados- Salario Promedio y Mediana**



Fuente: Boletín de Remuneraciones, junio de 2007. Dirección de Estadísticas y Estudios Laborales- SSPTYEL. MTESS. Elaborado por S. Rojo y V. Castillo, en base a los datos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

medio y de reducción de los diferenciales salariales revela que están operando mecanismos regulatorios específicos. En este caso, se trata principalmente de la institución del salario mínimo, vital y móvil.

El incremento progresivo del salario mínimo, vital y móvil constituye una política pública que viene siendo aplicada sistemáticamente desde 2004, y que llevó su valor desde 200\$ hacia fines de 2001 (valor que había sido establecido en 1993), a 800\$ en noviembre de 2006. La determinación de este salario es dispuesta por el Poder Ejecutivo, a instancias del Consejo (tripartito) del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el que participan representantes de las centrales sindicales (CGT y CTA) y de diversas cámaras empresarias.

Las funciones del salario mínimo y la negociación colectiva en el nuevo régimen de empleo se diferencian claramente de las que cumplían en el régimen laboral previo. Actualmente, el incremento progresivo del salario mínimo tiende a elevar el “piso” de la negociación colectiva, en el sentido que asegura para los sindicatos más débiles la obtención de salarios básicos de convenio más elevados que los que podrían obtener si no mediara la intervención estatal. De este modo, mientras que el salario nominal promedio creció 135% entre agosto de 2001 (800\$) y abril de 2007 (1881\$), el salario mínimo se multiplicó por cuatro en el mismo período (al pasar de 200\$ a 800\$): a través de este mecanismo tiende a atenuarse la diferenciación salarial. La fijación de un piso más elevado para la negociación colectiva, opera también como un estímulo de ésta, ya que obliga a los sindicatos y los empleadores a convocarla para revi-

sar las escalas salariales de convenio, que es el contenido prevaleciente en la actualidad. Estos mecanismos otorgan a la negociación colectiva contemporánea una función decisiva en la determinación de los salarios, que es básicamente compensadora de las desigualdades salariales.

Durante el período de vigencia del régimen de precarización previo en los '90, las funciones del salario mínimo eran radicalmente diferentes, ya que su prolongado congelamiento (permaneció en 200\$ entre 1993 y principios de 2002), tendió a desvincularlo de la negociación colectiva y constituyó un factor de diferenciación salarial en la medida que suponía fijar un "piso" salarial bajo e inmutable (e incluso su disminución en caso de aumento del índice de precios). La función de la negociación colectiva, en este contexto, era básicamente adaptativa en relación con las necesidades de las empresas, lo que explica en parte la relativamente baja frecuencia de las negociaciones a lo largo de la década de los '90, ya que los sindicatos eran renuentes a negociar salarios "a la baja" dada su debilidad relativa, provocada básicamente por el crecimiento de la desocupación y del trabajo no registrado. La función predominantemente adaptativa de la negociación colectiva se comprueba sobre todo por sus contenidos, entre los que prevalecían los temas colocados por las empresas vinculados con sus necesidades de reestructuración y cambios en la organización del trabajo.

### **3.3. El comportamiento de los actores sociales.**

Uno de los efectos más notorios del nuevo régimen de empleo, es la reemergencia de los conflictos laborales impulsados por los sindicatos, que fueron desplazando paulatinamente, en la esfera pública, las movilizaciones impulsadas por diversos actores sociales, en particular, los movimientos de desocupados. Éstos habían liderado la protesta social durante los prolongados años de la crisis, desde mediados de los 90' hasta 2003 (Cotarello, 2006). A partir de 2004 las protestas cobran la forma del conflicto laboral y sindical y el impulso de los reclamos deviene típicamente salarial.

Una revisión de los conflictos laborales registrados durante 2006 (Base de Conflictos Laborales del MTESS, 2007), indica que al menos 6,2% de los conflictos laborales fueron impulsados por los trabajadores y sus sindicatos sosteniendo como reclamo principal la regularización contractual. Pero si se observa el resto de los conflictos, al menos 20% de los mismos fueron sostenidos por trabajadores y sindicatos cuya condición los situaba en posición de subcontratados y en los que el eje de sus reclamos, fueran salariales o de otro tipo, se basaba en dicha condición. Estos reclamos se multiplicaron en casi todos los sectores de actividad, aunque prevalecieron en el sector de las empresas de servicios públicos privatizados que, durante los '90, acrecentaron la difusión de las relaciones de subcontratación. Tanto en este sector de empresas de servicios públicos, en el que se destacaron las de transporte, telefonía,

energía y petróleo, como en sectores más tradicionales como construcción, comercio y salud, numerosos conflictos laborales fueron impulsados en nombre del rechazo a la subcontratación precarizante -o a la “tercerización”- y la demanda de equidad de condiciones de trabajo y salarial con el personal contratado directamente por las empresas.

Las renovadas demandas contemporáneas de trabajadores y sindicatos en contra de la precarización y la subcontratación precarizante contrastan con la relativa prescindencia sindical ante el avance de la precarización durante los '90. Un ejemplo revelador al respecto lo constituye la demanda reciente impulsada y conseguida finalmente en 2007 por el sindicato de Comercio, en demanda del pago de jornada extraordinaria por el trabajo durante los domingos en la Provincia de Buenos Aires. Lo llamativo no es la demanda en sí, sino que se haya efectuado tan recientemente, en contra de una norma que provenía de 1978 -sancionada por el régimen militar de entonces y que habilitaba un régimen rotativo de descansos semanales, lo que equiparaba todos los días de la semana eliminando la diferencia entre días laborales y no laborables-, y fuera impulsada por los mismos dirigentes que habían convivido con esa norma durante más de 28 años. Este es un ejemplo preciso de la incidencia del cambio de régimen de empleo sobre el comportamiento de los actores sociales.

En relación con el comportamiento de los empresarios no disponemos de bases de información comparables a las citadas para las otras dimensiones analizadas, aunque cabe presumir de diversas iniciativas institucionales por un lado, y de un rico anecdótico público por el otro, la adopción de comportamientos adaptativos al nuevo régimen de empleo. Entre las iniciativas institucionales pueden citarse los programas de responsabilidad social empresaria enfocadas al control de las cadenas de subcontratación de proveedores, como las que promueve el MTESS. En relación con el anecdótico público, parecen multiplicarse los casos en que los propios empresarios toman la iniciativa para controlar el “trabajo en negro” dentro de sus cadenas de proveedores. Pero, reiteramos, no contamos con la posibilidad de “medir” estadísticamente estos cambios de comportamiento y sólo podemos acceder, en este caso, a algunas mediciones sobre las respuestas a los controles estatales de la inspección del trabajo, en especial al % de inscripciones a la seguridad social de trabajadores por parte de empresas sobre las que se habían detectado irregularidades al respecto.

#### **4. Conclusiones: el nuevo régimen de empleo y la recomposición del marco de acción colectiva.**

La instalación de un nuevo régimen de empleo fue aducido como hipótesis para explicar el crecimiento del empleo asalariado registrado entre 2005 y 2007, tendencia que, en función de la hipótesis expuesta posiblemente se prolongue en el mediano plazo. La idea de “régimen”

apunta a la determinación de una serie de complementariedades institucionales, que vinculan la recuperación del rol de arbitraje y de control del Estado sobre el registro laboral, con la reinstalación normativa del control jurídico sobre la subcontratación, con las políticas públicas del salario mínimo y la negociación colectiva y, finalmente, con los cambios de comportamiento de las organizaciones sindicales, los trabajadores y otros actores sociales.

Estos cambios de comportamiento de los actores sociales, indicados aquí a través del análisis de los conflictos laborales recientes, apuntan a la renovación de los marcos de acción colectiva. Esta tesis, surgida de los estudios de los movimientos sociales recientes (Wyczykier, 2007), parece adecuada para la comprensión de la situación argentina contemporánea, aunque se sitúa en contraposición con algunos de los discursos teóricos prevaecientes actualmente en las ciencias sociales, volcadas al análisis de la individualización, la desafiliación y otros conceptos afines, orientados al estudio de los efectos sociales de la desestructuración o descomposición de las relaciones de trabajo. En relación con este discurso, muchas veces utilizado para fundamentar las tendencias ineluctables de la globalización o mundialización, las tendencias aquí reseñadas sólo pueden ser concebidas como extravíos, ya que vuelven a colocarse en primer plano el rol del Estado, los sindicatos y los comportamientos de orden colectivo. Asimismo, ese discurso, fuertemente instalado durante los '90 y que se aplicaba a la explicación del régimen de precarización del empleo prevaeciente en esa época, sigue vigente actualmente a favor de la persistencia de algunos de los fenómenos empíricos que lo sustentan, en especial el desempleo y la precariedad en la inserción laboral. Sin embargo, el desempleo y la precariedad tienden a ser actualmente cada vez más acotados, ya que se sitúan en un rápido proceso de disminución. Es decir, los datos "estructurales" relacionados con el elevado *stock* de personas en situación de desocupación y precariedad, no coinciden con la evolución reciente y el cambio en la dinámica del empleo.

La discordancia entre hechos y teorías refleja un fenómeno típico de las transiciones (Hirschman, 1992), durante las cuales los nuevos esquemas de reflexión, en la medida que no se vinculen con nuevas reglas de comportamiento, permanecen en la sombra de las anteriores modalidades de comprensión de la realidad. Sin embargo, los cambios de comportamiento colectivo detectados en el plano de los conflictos laborales, permiten anticipar que los lazos entre los nuevos esquemas de reflexión con nuevas reglas de comportamiento deberían anudarse en un plazo más o menos breve en Argentina. En particular, se destaca el cambio en los comportamientos de los sindicatos, muchos de los cuales permanecieron relativamente pasivos frente la precarización de los '90, mientras que actualmente la rechazan activamente. Esta situación particular de nuestro país en relación con las tendencias descriptas, difiere considera-

blemente de la vigente en otros países, particularmente los europeos, suelo de emergencia de la noción de precariedad. Lo cual anticipa sin duda, el marco de debate teórico futuro en relación con los temas expuestos.

### **Bibliografía**

- Amable, B. (2005). *Les cinq capitalismes. Diversité des systèmes économiques et sociaux dans la mondialisation*. Éditions du Seuil. Francia.
- Beccaria, L. y Galín, P. (2002). *Regulaciones Laborales en Argentina. Evaluación y propuestas*. Ed. Fundación OSDE/ CIEPP. Buenos Aires.
- Bensusan, G. Coordinadora (2006). *Diseño legal y desempeño real: instituciones laborales en América Latina*. Ed. H. Cámara de Diputados LIX Legislatura, UAM Xochimilco, Ed. Miguel Angel Porrúa. México D.F.
- Beck, U. (1997). *La reinención de la política: hacia una teoría de la modernización reflexiva*. Alianza Editorial. Madrid.
- Castel, R. (1997). *La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*. Paidós. Buenos Aires.
- Cotarelo, M. C. (2006). *Informe sobre conflictos laborales y conflictos sociales 2001-2005*. Dirección de Estudios de Relaciones de Trabajo. SSPTyEL- MTESS. Buenos Aires (inédito).
- Desvé, C et Lorençon, M-F (2002). *La precarité de l'emploi. Dossier de l'ANPE*. París. Francia.
- Fourcade, B. (1992). L'évolution des situations d'emploi particulières de 1945 à 1990. *Travail et emploi*, n° 52/2, pp. 4-19. Francia.
- Galín, P. y Campos, M. (2005). "La experiencia internacional sobre políticas para la regularización del empleo no registrado. Proyecto CRISIS, OIT/MTESS", Buenos Aires, julio, 2005. *Serie de Documentos de Trabajo N° 28*. Disponible en: [http://www.trabajo.gov.ar/seminarios/2006/files/281105/Galin\\_02.pdf](http://www.trabajo.gov.ar/seminarios/2006/files/281105/Galin_02.pdf)
- Galín, P y Novick, Comps.(1990). *La precarización del empleo en Argentina*. Ed. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires.
- Giddens, A. (1996). *Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea*. Ediciones Península. Barcelona.
- Hirschman, A. (1996). *Acción pública e interés privado*. Ed. FCE. México.
- Lépore, E., Roca, E., Schachtel, L. y Schlessner, D. (2006). "Evolución del empleo registrado y no registrado en el período 1990-2005."

- En: *Trabajo, Ocupación y Empleo* N°5, sobre Salarios, Empresas y Empleo 2003-2006. SSPTyEL - MTESS.
- Offe, K. (1992). *La sociedad del trabajo: problemas estructurales y perspectivas de futuro*. Alianza Editorial. Madrid.
- Paugam, Serge (2007). *Le salarié de la précarité: les nouvelles formes de l'intégration professionnelle*. Ed. Presses Universitaires de France – PUF.
- Palomino, H y Trajtenberg, D. (2007). “Una nueva dinámica de las relaciones laborales y la negociación colectiva en Argentina”. *Revista de Trabajo* N° 3 – Año 2- Nueva Época. MTESS.
- Plan Integral para la Promoción del Empleo (2007). *Evolución trimestral de los beneficiarios del Programa Jefas y Jefes de Hogar desocupados*. Junio de 2007. Informe de la Secretaría de Empleo – MTESS (inédito).
- Schlesser, D. (2004). “Diagnóstico del empleo no registrado”. En: *Trabajo, Ocupación y Empleo* N°4. Estudios 2004. SSPTyEL-MTESS.
- Schlesser, D. y Lépure, E. (2005). *La heterogeneidad del trabajo no registrado*. SSPTyEL- MTESS. Informe interno no publicado.
- Schlesser, D. (2008). “La evolución del trabajo no registrado en el debate actual”. *Trabajo, Ocupación y Empleo* N° 7. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Buenos Aires. En prensa.
- Senen González, C. y Palomino, H. (2006). *Diseño legal y desempeño real*. Argentina. Cap. 2 de Bensusan, G. coordinadora, op cit.
- Sennet, R (2000). *La corrosión del carácter*. Ed. Anagrama. España.
- Svampa, M. y Pereira, S. (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Editorial Biblos. Buenos Aires.
- Varios autores (2007). *Los conflictos laborales durante 2006. Base de Conflictos Laborales*. Dirección de Estudios de Relaciones de Trabajo. SSPTyEL- MTESS. Buenos Aires (inédito).
- Wyczykier, G. (2007). *De la dependencia a la autogestión laboral: sobre la reconstrucción de experiencias colectivas de trabajo en la Argentina contemporánea*. Tesis de Doctorado. Flacso. Buenos Aires (inédito)

## RESUMEN

El artículo aborda el análisis del desempeño del mercado laboral argentino en lo relativo a la distribución de los empleos entre registrados y no registrados. Se destacan cambios significativos en la tendencia que venía dominando desde los inicios de los años ochenta, y que por un

cuarto de siglo reflejó el predominio en la creación de empleos de los no registrados. Pero a partir del 2004 esta tendencia se quiebra, como lo evidencian los datos recogidos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Explicar las razones que permiten este fenómeno es el eje de esta contribución.

**Palabras Clave:** Desempleo - Empleo - Negociación Colectiva - Precarización - Salarios.

## **ABSTRACT**

The article deals with the analysis of the performance of the Argentine labour market regarding the distribution of jobs between registered and unregistered. It highlights significant changes in the trend that had dominated since the beginning of the eighties, and that for a quarter century reflected the dominance in job creation of unregistered. But since the end of 2004 this trend is overtaken by the registered jobs, as evidenced by the data collected by the Ministry of Labour, Employment and Social Security. Explaining the reasons that allow this phenomenon is the focus of this contribution.

**Key words:** Employment - Casual Work - Collective Bargaining - Unemployment - Wages.